

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se establece un sistema de identificación y registro de animales de la especie equina, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Tal y como indica su artículo 1, el Proyecto sometido a informe tiene por objeto establecer las características básicas del sistema de identificación y registro de los animales equinos en España, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) 504/2008, de la Comisión, de 6 de junio de 2008, por el que se aplican las Directivas 90/426/CE y 90/427/CE por lo que se refiere a los métodos de identificación de équidos.

De este modo, se establece un sistema de identificación y registro de équidos basado en la expedición de un documento de identificación equina, un sistema de identificación del animal que garantice un vínculo inequívoco entre el documento de identificación y el animal equino, consistente, con carácter general en la implantación en el animal de un transpondedor, en los términos previstos en el propio Proyecto y la creación de bases de datos informatizadas.

En el primero de los documentos se incluirán las informaciones a las que se refiere el Anexo del Reglamento 504/2008 de la Comisión, incluyendo datos identificadores del propietario o titular del animal, así como del veterinario que ordene la realización de determinadas actuaciones relacionadas con el mismo. Sin embargo, según se indica dichos datos no parece que vayan a ser incorporados a las bases de datos reguladas por el Proyecto. No obstante, el artículo 12 prevé en su párrafo segundo que para la verificación del documento identificador podrán consultarse “los documentos adecuados y las bases de datos disponibles, así como el control del animal para detectar cualquier señal o marca que muestre un identificador único”.

Las bases de datos informatizadas se regulan en el Capítulo IV del Proyecto, conteniendo, según el artículo 16.1, los datos a los que se refiere el Anexo III del texto, entre los que esencialmente e incluyen informaciones relativas al animal, pero entre los que igualmente se incluyen los datos de nombre del titular, consistente en el nombre de la persona física o jurídica que sea propietaria, posea o sea responsable de cuidar a un animal equino, con o sin fines lucrativos, y a título permanente o temporal, incluso durante su transporte, en mercados o durante competiciones, carreras o actos culturales, y asimismo solicite la identificación del animal” y la dirección del mencionado titular.

Los datos serán objeto de tratamiento por las entidades emisoras, que en caso de no ser las autoridades competentes, darán inmediatamente traslado de la información a esas autoridades, conforme a artículo 16.3, incluyéndose asimismo los datos obrantes en los registros de las autoridades competentes en el registro general de identificación individual de los animales (RIIA), dependiente del Ministerio de medio Ambiente y Medio Rural y Marino, al que las autoridades competentes tendrán acceso informático inmediato para la información que les compete (artículos 16.4 y 16.5 del Proyecto).

En todo caso, los datos se conservarán durante un período de 35 años o, al menos, hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte del animal.

Por otra parte, el artículo 17 prevé la creación por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de un registro de organismos emisores, en que se mantendrá actualizada la lista de los que existan en España, siendo dicha lista accesible a través de la página web del Departamento y comunicada a la Comisión Europea y a los restantes Estados Miembros.

Dicho lo anterior, debe igualmente indicarse que no todos los datos contenidos en los citados registros se encontrarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

En efecto, el artículo 2.1 de la Ley Orgánica delimita su ámbito de aplicación, señalando que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”, siendo datos de carácter personal, conforme al artículo 3 a) “Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”.

De este modo, obviamente, los datos identificativos de los animales y de sus movimientos no se encontrarán sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, que será aplicable únicamente a los supuestos en los que se produzca el tratamiento de datos referidos a personas físicas.

Por tanto, teniendo en cuenta que del tenor del Proyecto parece desprenderse que únicamente serán objeto de tratamiento, por una parte los datos de identificación y domicilio de los titulares de équidos, dentro de la base de datos de animales, y por otra los relacionados con los organismos emisores, en la base de datos relacionada con estos últimos, la incidencia del Proyecto en materia de protección de datos quedará únicamente limitada a estos supuestos.

En particular, en relación con los organismos emisores, el Proyecto no establece qué datos serán objeto de tratamiento ni si los mismos quedaría únicamente limitados a los datos relacionados con el propio organismo, por lo

que se analizará la procedencia del tratamiento de los datos en este punto bajo la consideración de que sería posible la inclusión de algún dato referente a personas físicas en esta base de datos, en cuyo caso dicho tratamiento debería ser proporcional a la finalidad de publicidad de los organismos emisores pretendida por la norma, sin incluir otros datos adicionales que no sean adecuados o pertinentes o que resulten excesivos para esa finalidad, tal y como exige el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

Dicho esto, el tratamiento de los datos en las bases de datos mencionadas deberá resultar respetuoso con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Por otra parte, en cuanto a las cesiones de datos, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica prescribe que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, si bien será posible la cesión en caso de que la misma se encuentre amparada por una norma con rango de Ley, conforme dispone el artículo 11.2 a).

Esta regla deberá ser tenida en consideración en lo referente a la publicidad general del registro de organismos emisores y en lo que respecta a las cesiones de datos a las autoridades competentes y de éstas al Ministerio proponente, así como el acceso que las autoridades competentes tendrán a la información contenida en el RIIA.

Conforme ya se ha venido indicando, el objeto de la norma sometida a informe es el desarrollo en nuestro ordenamiento de las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) 504/2008, de la Comisión de 6 de junio de 2008.

En relación con la base de datos de animales, el considerando 31 del mencionado Reglamento señala que “Con objeto de mantener el control sobre la emisión de los documentos de identificación, se debe registrar en una base de datos un conjunto mínimo de datos pertinentes para la emisión de tales documentos. Las bases de datos de los distintos Estados miembros deben colaborar de conformidad con la Directiva 89/608/CEE del Consejo, de 21 de noviembre de 1989, relativa a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las legislaciones veterinaria y zootécnica (6), para facilitar el intercambio de datos”.

A su vez, conforme señala el artículo 3.3 c) del Reglamento “A efectos del presente Reglamento, el sistema de identificación de los équidos constará de los siguientes elementos (...) una base de datos que registre, con un número de identificación único, los detalles identificativos relativos al animal cuyo

documento de identificación se haya emitido para una persona registrada en esa base de datos”.

Conforme al artículo 5.1, “Los équidos nacidos en la Comunidad se identificarán mediante un documento de identificación único de conformidad con el modelo de documento de identificación de équidos que se establece en el anexo I («documento de identificación» o «pasaporte»). Se emitirá para toda la vida del animal”.

El artículo 21 del Reglamento regula la base de datos de animales, disponiendo que al emitir el documento de identificación o registrar los documentos de identificación emitidos anteriormente, el organismo emisor registrará en la citada base de datos los datos enumerados en el artículo 21.1, incluyendo “nombre y dirección de la persona destinataria del documento de identificación.

Además, conforme al artículo 21.2 “El organismo emisor mantendrá registrada la información mencionada en el apartado 1 del presente artículo en su base de datos durante un mínimo de treinta y cinco años o al menos hasta dos años después de la fecha de la muerte del animal equino”.

Por otra parte, el artículo 21.3 prevé la existencia de una base de datos central en cada Estado, a la que se comunicará la información a la que se refiere el precepto. Añade el artículo 23.1 que “Un Estado miembro puede decidir que el organismo emisor debe integrar toda la información mencionada en el artículo 21 sobre los équidos nacidos o identificados en su territorio en una base de datos central, o que la base de datos del organismo emisor debe ponerse en red con dicha base de datos central («la base de datos central»).

De este modo, la existencia de la base de datos y la comunicación de la información al registro RIIA del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se encontraría amparada por lo dispuesto en los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con las normas comunitarias que acaban de indicarse, dotadas de efecto directo, al incluirse en un Reglamento comunitario.

Por otra parte, en el ámbito del derecho español, debe recordarse que las competencias en la materia corresponden a las Comunidades Autónomas, que tendrán la consideración de autoridades competentes, sin perjuicio de que proceda la creación de la mencionada base de datos central, a la que será comunicada la información y de la que podrá obtenerse por las autoridades competentes la información necesaria en su correspondiente ámbito competencial. De este modo, las comunicaciones entre las administraciones estatal y autonómicas podría considerarse amparada, a sensu contrario, en lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras

Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”, dado que los datos son comunicados en el ejercicio de unas mismas competencias.

Por lo que respecta al registro de entidades colaboradoras, y hecha la salvedad ya mencionada con anterioridad en lo que respecta a la proporcionalidad en el tratamiento de datos de personas físicas en dicha base de datos, el artículo 4.5 del Reglamento (CE) 504/2008 prevé que “Los Estados miembros establecerán y mantendrán actualizada la lista de organismos emisores y ofrecerán esta información a los demás Estados miembros y al público en un sitio web”.

Además, “La información sobre los organismos emisores incluirá al menos los datos de contacto necesarios para cumplir los requisitos del artículo 19”, concluyendo que “Con objeto de ayudar a los Estados miembros a ofrecer estas listas actualizadas, la Comisión proporcionará un sitio web en el que cada Estado miembro incluirá un vínculo a su sitio web nacional”.

De este modo, siempre que se cumpla el principio de proporcionalidad ya mencionado, el tratamiento y cesión de los datos se encontrará amparado por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 en relación con el artículo 4.5 del Reglamento 504/2008.

A la vista de todo ello, procede informar favorablemente el Proyecto sometido al parecer de esta Agencia Española de Protección de Datos.